

ticas, del actual Profesorado titulado de la Escuela Oficial de Asistentes Sociales.

g) Proponer al Rector, cuando en la Escuela no exista Profesorado para impartir las enseñanzas correspondientes, el plan de estudios que se implante a partir del año académico 1983-1984, la contratación o designación, de conformidad con el Estatuto de la Universidad, de Profesores que estén en posesión de la titulación precisa para impartir aquellas enseñanzas.

Dos. La Comisión Gestora de Integración, al finalizar cada año académico, elevará al Rector un informe relativo a la implantación de los sucesivos cursos del nuevo plan de estudios, así como a las incidencias de todo orden que en tal proceso puedan producirse.

Tres. La Comisión Gestora de Integración quedará disuelta tras la implantación y desarrollo completo de los estudios de esta Escuela Universitaria.

Art. 4.º La integración de esta Escuela no supondrá incremento del gasto público, procediéndose a la redistribución de las dotaciones actualmente existentes en los Presupuestos Generales del Estado y de la Universidad.

Art. 5.º Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el cumplimiento del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 10 de septiembre de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

26824 ORDEN de 19 de septiembre de 1983 por la que se declaran equiparaciones y analogías a la plaza de «Derecho político español e Instituciones autonómicas vascas» de Facultades de Ciencias de la Información.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Junta Nacional de Universidades, en fecha 7 de julio de 1983, en relación con la plaza de «Derecho Político Español e Instituciones Autonómicas Vascas», de Facultades de Ciencias de la Información. Vista la autorización contenida en la disposición final primera del Real Decreto 1324/1981, de 19 de junio,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Declarar equiparaciones y analogías a la plaza de «Derecho Político Español e Instituciones Autonómicas Vascas», de Facultades de Ciencias de la Información, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Equiparadas

- «Derecho Político» (de las Facultades en que exista).
- «Derecho Político Español» (de las Facultades en que exista).
- «Teoría del Estado y Derecho Constitucional» (de las Facultades en que exista).

Análogas

- «Teoría Política» (Ciencias Políticas y Sociología).
- «Historia de las Ideas y de las Formas Políticas» (Ciencias Políticas).
- «Historia del Pensamiento Político y Social Español» (Ciencias Políticas).

Segundo.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.

Madrid, 19 de septiembre de 1983.—P. D. (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

26825 ORDEN de 20 de septiembre de 1983 por la que se declaran analogías a la plaza de «Historia de las Instituciones políticas y administrativas de España» de Facultades de Ciencias Políticas y Sociología.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Junta Nacional de Universidades en la sesión celebrada el 7 de julio de 1983, en relación con las analogías a la plaza de «Historia de las Instituciones Políticas y Administrativas de España», de Facultades de Ciencias Políticas y Sociología,

Vista la autorización contenida en la disposición final primera del Real Decreto 1324/1981, de 19 de junio,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Sustituir la declaración de analogías contenidas en la Orden ministerial de 27 de julio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» del 1 al 11 de septiembre), aprobatoria del cuadro general de equiparaciones y analogías, en lo relativo a la plaza

de «Historia de las Instituciones Políticas y Administrativas de España», de Facultades de Ciencias Políticas y Sociología, por las que a continuación se indican:

Análogas

- «Derecho administrativo y Ciencia de la administración».
- «Ciencia de la Administración».
- «Derecho político español».
- «Teoría del Estado y Derecho constitucional».
- «Historia de las ideas y de las formas políticas».
- «Derecho administrativo (FF. de Derecho)».
- «Derecho político (FF. de Derecho)».

Segundo.—La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.

Madrid, 20 de septiembre de 1983.—P.D. (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

26826 CORRECCION de erratas de la Orden de 12 de mayo de 1983 por la que se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (no estatal) de Oñate (Guipúzcoa), adscrita a la Universidad del País Vasco.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 169, de fecha 16 de julio de 1983 página 18933, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo se reproduce debidamente rectificado el primer curso:

	Horas semanales
<i>Primer curso</i>	
Matemáticas para Economistas I	7
Teoría económica (introducción)	5
Historia económica	3
Contabilidad general	5
Derecho (introducción)	3
Sociología	2

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

26827 ORDEN de 8 de septiembre de 1983 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 37.258, promovido por la Administración Pública, contra sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 23 de octubre de 1980, en el recurso contencioso-administrativo número 755/78, interpuesto contra resolución de este Ministerio, de 28 de abril de 1978.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 37.258/81, interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Administración Pública, contra la sentencia dictada con fecha 23 de octubre de 1980 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso número 755/1978, referente a facturación de energía eléctrica, se ha dictado, con fecha 28 de noviembre de 1982, por el Tribunal Supremo en apelación, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación promovido por la representación del Estado, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 23 de octubre de 1980; sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida

sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 8 de septiembre de 1983.—P. D. (Orden de 30 de junio de 1980), el Subsecretario, Luis Carlos Croissier Batista.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

26828

ORDEN de 8 de septiembre de 1983 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Zaragoza, en el recurso contencioso-administrativo número 53/1981, promovido por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), contra resolución de este Ministerio de 15 de diciembre de 1980.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 53/1981, interpuesto por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), contra resolución de este Ministerio de 15 de diciembre de 1980, se ha dictado con fecha 13 de noviembre de 1981 sentencia, por la Audiencia Territorial de Zaragoza, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:

1.º Estimamos el recurso contencioso administrativo deducido por la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), contra Resolución de la Dirección General de la Energía de 15 de diciembre de 1980, que desestimó el recurso de azada interpuesto por aquella contra denegación presunta por silencio de la Delegación Provincial de Industria de Zaragoza, en expediente sobre facturación de energía eléctrica en que se denegó la petición de RENFE de que se girara con un 20 por 100 de descuento sobre facturación por alumbrado en la estación de La Almozara (subestación número 1), de Zaragoza.

2.º Anulamos las resoluciones expresa y presunta recurridas por disconformes con el ordenamiento jurídico.

3.º Declaramos que procede aplicar a la Entidad recurrente RENFE, el descuento del 20 por 100 de la energía recibida y medida en alta en las tarifas de alumbrado en la expresada estación repartiendo proporcionalmente a los consumos de alumbrado y fuerza las pérdidas de transformación.

4.º No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.

Y así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

La sentencia inserta adquirió el carácter de firme al desestimar el Tribunal Supremo el recurso de apelación por sentencia de 8 de junio de 1983.

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 8 de septiembre de 1983.—P. D. (Orden de 30 de junio de 1980), el Subsecretario, Luis Carlos Croissier Batista.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

26829

ORDEN de 4 de octubre de 1983 por la que se desarrolla el Real Decreto-ley 5/1983, de 1 de septiembre, sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por las recientes inundaciones en el País Vasco, Cantabria, Asturias, Burgos y Navarra.

Ilmos. Sres.: El Real Decreto-ley 5/1983, de 1 de septiembre, sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por las recientes inundaciones en el País Vasco, Cantabria, Asturias, Burgos y Navarra, en su artículo 10 faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para declarar zona de actuación especial del IRYDA a las áreas afectadas, con el objeto de restaurar en lo posible la situación anterior a la catástrofe. En ese mismo artículo se encomienda a este Ministerio que dicte las normas de desarrollo necesarias para la aplicación de los beneficios establecidos en la legislación vigente sobre reforma y desarrollo agrario para las zonas de interés nacional, introduciendo en las clasificaciones y ejecución de las obras las modificaciones impuestas por las peculiaridades características de los daños sufridos.

El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha definido su actuación y comprobado que ésta se puede extender a todo el ámbito señalado en la Orden del Ministerio del Interior de 5 de septiembre de 1983 por la que se determinan los términos municipales de las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Burgos y Navarra, afectados por las recientes inundaciones.

En primer lugar se contemplan las acciones precisas para el reacondicionamiento de las obras de uso común de infraestructura viaria y de riego, así como las de defensa, encauzamiento y corrección de cauces y reposición de servicios dañados por las riadas.

Asimismo se establecen las acciones de reparación de daños en fincas, separando las actuaciones directas de las ayudas a las obras que se acometan por la iniciativa privada, se señalan los límites a partir de los cuales los daños se deben considerar como catastróficos y los casos en que se precisa la actuación de la propia Administración.

Para completar la actuación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario se clasifican las restantes acciones a desarrollar para la restauración de las dependencias agrarias y demás mejoras permanentes de las explotaciones individuales, así como de las obras, edificaciones e instalaciones de carácter cooperativo o asociativo.

Al mismo tiempo se han mantenido diversas reuniones con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cantabria y Asturias con el fin de poner en común los datos y evaluaciones obtenidos por las diversas Administraciones, planteando, al mismo tiempo, un avance de las actuaciones a realizar y la forma más eficaz y coordinada de llevarlas a cabo.

En consecuencia, y en cumplimiento de las previsiones del Real Decreto-ley 5/1983, de 1 de septiembre, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se declaran zonas de actuación especial del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, a los efectos de restaurar en lo posible la situación anterior a la catástrofe, los términos municipales relacionados en la Orden del Ministerio del Interior de 5 de septiembre de 1983 por la que se determinan los términos municipales de las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Burgos y Navarra afectados por las recientes inundaciones.

Art. 2.º 1. En las áreas determinadas en el artículo anterior, se realizarán totalmente a expensas del Estado las obras de defensa encauzamiento y corrección de cauces, obras de riego, desagües y reparación y reposición de caminos rurales que sean todas ellas de uso común, correspondiéndoles, en consecuencia, la clasificación de obras de interés general dentro de la nomenclatura establecida en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para las Grandes Zonas Regables.

2. Asimismo, cuando la pérdida de la superficie agrícola de la finca sea superior al 50 por 100 de la superficie total, las obras de restitución de las mismas se clasifican como obras de interés general dentro de la nomenclatura establecida en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para las Grandes Zonas Regables, ejecutándose, por tanto, dichas obras a expensas del Estado.

Art. 3.º Las obras de recuperación de terrenos de fincas cuyos daños totales, descontadas las cosechas, sean superiores a 60.000 pesetas por hectárea, y no precisen de la actuación directa de la Administración, tendrán la calificación de obras de interés común, y podrán ser realizadas por sus propietarios aislados o, preferentemente, agrupados, correspondiéndoles una subvención del 40 por 100 de los presupuestos que, previamente, haya aprobado la Administración, pudiéndose contratar los trabajos con la Empresa de «Transformación Agraria, S. A.» (TRAGSA).

Art. 4.º En las áreas determinadas en el artículo 1.º de la presente Orden se clasifican como obras de interés agrícola privado, de acuerdo con la nomenclatura establecida en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para las Grandes Zonas Regables, las redes de riego y desagües de último orden, instalaciones especiales de riego, drenajes, viviendas rurales y dependencias agrarias y, en general, las mejoras permanentes de toda índole de las explotaciones individuales que hayan sido afectadas o que hayan sufrido daños, pudiendo ser realizadas por sus propietarios. Estas obras tendrán, por tanto, una subvención del 30 por 100 de los presupuestos previamente aprobados por la Administración.

Art. 5.º En las áreas determinadas en el artículo 1.º de la presente Orden se clasifican como obras complementarias, de acuerdo con la nomenclatura establecida en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para las Zonas Regables declaradas de interés nacional, las obras, edificaciones o instalaciones de carácter cooperativo o asociativo que hayan sido afectadas o que hayan sufrido daños por las pasadas inundaciones. Estas obras tendrán una subvención del 20 por 100 del importe de sus presupuestos previamente aprobados por la Administración y un anticipo reintegrable del 80 por 100 restante a un interés anual del 4 por 100 y un plazo máximo de veinte años.

Art. 6.º Se aprueba la programación establecida por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario para las distintas actuaciones previstas en la presente Orden, reflejadas en el anexo de la misma.